
ESPAÑA Y EL SAHARA

Domingo del Pino



4

Si el general Capaz hubiera tenido razón cuando afirmaba en 1933 que la pacificación del Sahara Occidental era cuestión de un millón de pesetas, el conflicto actual, que ahora se dispone a entrar en su segundo decenio, habría encontrado solución hace tiempo. Quizá ni siquiera hubiera estallado. Pero invertir en guerra no parece tener mucha importancia en el presente.

Marruecos, al menos, se ha dotado de uno de los ejércitos mejor preparados y equipados de Africa, y de unas fuerzas de seguridad que asesoran a las de media docena de países. Gasta, o gastaba antes de la construcción de los *muros defensivos*, según estimaciones norteamericanas, unos tres millones de dólares diarios. El Frente Polisario, y Argelia que le presta su terri-

torio e infraestructura logística militar y diplomática, pueden realizar una inversión combinada de un millón de dólares al día para el sostenimiento de la RASD y su esfuerzo militar y civil.

En 1974, en el prelude de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el Sahara Occidental era, gastronómicamente hablando, un bocado muy apetecible. Desde los ya-

cimientos de fosfatos de Bu Craa se habían exportado ese año tres millones de toneladas. Se tenían indicios fundados de existencia de petróleo, hierro, uranio, cobre, y de bolsones importantes de agua. La pesca, con un millón y medio de toneladas capturadas en aguas saharianas entre las diferentes flotas que allí faenaban, prometía ser una fuente significativa de renta adicional. El INI había concedido ya prácticamente toda la costa y la mayor parte de la Sakiet el Hamra a compañías extranjeras que parecían creer que el Sahara Occidental se convertiría en un nuevo Eldorado.

No cabe duda hoy de que la guerra por un lado, y Marruecos por otro, han modificado radicalmente la fisonomía humana del territorio. Los combates acabaron con el modo tradicional de vida nómada y tribus itinerantes enteras, y pequeñas localidades sedentarias que quedaron aisladas, debieron optar por uno u otro contendiente. La recuperación de la población autóctona fue la obsesión de todos, confirmando que a fin de cuentas los originarios del territorio siguen siendo un elemento clave para su futuro. Cuando Mauritania abandonó unilateralmente el Tiris el Gharbia (Río de Oro) en agosto de 1979, la preocupación mayor de Marruecos fue recuperar a los 816 habitantes de La Guera, porque ese pequeño puerto pesquero se lo quedaban los mauritanos.

Pero la transformación humana que Marruecos lleva a cabo desde hace unos años no consiste solamente en recuperar esos racimos de población abandonados por el desierto. Además de los cerca de 100.000 soldados de su ejército estacionados en el territorio, otros 80.000 ó 100.000 marroquíes procedentes del Norte, del interior de las fronteras de 1969, que fue la última expansión de la frontera sur marroquí antes de los Acuerdos Tripartitos y posterior anexión de Río de Oro, han sido trasladados al Sahara Occidental, han estable-

No cabe duda hoy de que la guerra, por un lado, y Marruecos por otro, han modificado radicalmente la fisonomía humana del territorio.

cido allí asentamientos, han hecho crecer las ciudades, se casan y mezclan con los autóctonos, ocupan puestos en las diferentes dependencias del Estado, en las empresas públicas y privadas, en la policía, la Seguridad, el comercio, la enseñanza, la medicina y los trabajos públicos, y están dando lugar a una realidad social y humana, a una nueva generación de nacidos en el Sahara, que dentro de unos años hará que todas las hipótesis de trabajo que aún se manejan como válidas para una solución del conflicto sean absolutamente impracticables.

Grandes proyectos como el ferrocarril Marrakech-El Aiun, la carretera Agadir-Nuadhibu, el túnel bajo el Estrecho de Gibraltar, el gasoducto Argelia-Europa a través de Marruecos, a enlazar en el futuro con los de Nigeria o Libia, pretendían darle un contenido moderno y económico al sueño imperial del Rey Hassan II y del nacionalismo marroquí de reconstruir en tiempos actuales, y para colmo por etapas, aquel melifuo imperio Almohade de los siglos XII y XIII. Allal el Fassi lo teorizó y el Partido Istiqlal le puso mapa con fronteras que llegaban por el Sur hasta San Luis de Senegal (la actual Dakar), incluía a toda Mauritania y el Sahara Occidental, y mordía por el Este en partes sustanciales a Argelia y Malí.

En 1958 el Ejército de Liberación marroquí, brazo armado del nacionalismo irredentista, quiso anticiparse a los Acuerdos Tripartitos de Madrid y conquistar el territorio por la fuerza, con la probable intención de convertirlo en una base de ataque contra la monarquía alauita. Al moderno diseño de Imperio indicado Marruecos sólo aportaría una especie de *renta de situación*. Ninguno de sus proyectos ha podido realizarse porque el Rey Hassan II cuenta para ellos con el gas y el petróleo de tres países ajenos, y la financiación de seis o siete países industrializados, que no han mostrado tanto entusiasmo como el Monarca.

A todo lo largo de los años sesenta la confrontación por el territorio fue eminentemente hispano-marroquí. El Rey Hassan II planteó formalmente su reivindicación del Sahara —y de Ifni— ante las Naciones Unidas en 1963, después de descubiertos los formidables yacimientos de fosfatos de Bu Craa. El 16 de diciembre de 1964 la ONU emitió la Resolución 2.072 que invitaba a España a negociar la descolonización del territorio inmediatamente, con Marruecos, Mauritania y toda otra parte interesada.

Por ese entonces el Rey Hassan II aceptaba el principio de la autodeterminación, pero con una condición que creía le convertía en ganador seguro: que se reintegrase previamente al territorio, para que pudiesen votar, a los saharauis que el Rey afirmaba que se habían refugiado en Marruecos huyendo de la represión española. El Istiqlal evaluaba el número de esos refugiados en 250.000, y el Gobierno marroquí en la cifra más modesta de 35.000.

Después de reiterar varias veces resoluciones anteriores, la Asamblea General de la ONU invitó a España en 1972 a organizar un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de la propia ONU, después de consultar con Marruecos, Mauritania que también había reclamado el Sahara para sí, y toda otra parte interesada. La designación digital por España en 1967 de una Yemaa (Asamblea) saharauí, el envío de la Legión Extranjera al Sahara, y la creación de las Fuerzas Nómadas y de la Policía Territorial indígena, trajo un período de confrontación que dio origen a nuevas presiones marroquíes en la ONU y, cómo no, a apresamientos de pesqueros españoles, y amenazas sobre Ceuta y Melilla.

El Tratado de Fez de 1969, mediante el cual España retrocedió el enclave de Ifni a Marruecos, fue seguido por una etapa de cierta euforia en las relaciones Madrid-

Rabat. Hassan II visitó a Franco en Madrid, y como gesto de buena voluntad recíproco el Caudillo sustituyó a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la Dirección General para la Promoción del Sahara —con lo cual dejábamos de tener provincias saharianas y compatriotas saharauis—, y Hassan II eliminó su Ministerio de Asuntos de Mauritania y del Sahara.

El Tratado de Fez incluía un Convenio de Pesca, como contrapartida a España por el abandono del Ifni, que concedía a los armadores españoles ciertos privilegios para la pesca en aguas marroquíes. El Convenio fue unilateralmente denunciado por Marruecos en 1972 a pesar de que su artículo 7.º establecía que *cualquier*

**A todo lo largo
de los años sesenta la confrontación
por el territorio
fue eminentemente
hispano-marroquí.**

ampliación de las aguas jurisdiccionales de una parte que pueda realizarse en el futuro de acuerdo con el Derecho Internacional, no afectará al régimen establecido

por el presente convenio, salvo acuerdo entre las dos partes contratantes. Su vigencia había sido fijada en 10 años. El 2 de marzo de 1973 el Gobierno marroquí extendía su Zona Económica Exclusiva a 70 millas, convirtiendo formalmente en superfluas las contrapartidas del Convenio de Pesca de Fez del 4 de enero de 1969. Marruecos interpretaba así a su conveniencia este convenio, como había hecho con otros anteriores y haría con otros posteriores.

Un especialista marroquí en cuestiones pesqueras, Abdeladim Tber, escribiría con gran soltura cinco años más tarde que el Convenio de Fez había sido denunciado *porque convenía ponerle fin, ya que lesionaba nuestros intereses.*

Marruecos contra Argelia

En esa misma década de los años sesenta, la independencia de Argelia después de una guerra armada revolucionaria dio na-

cimiento a un país que se proclamaba en la antípoda del régimen marroquí. Marruecos la saludó declarándole la guerra para forzar así la solución de la reivindicación territorial que también había presentado a los nacionalistas argelinos, precisamente sobre porciones considerables de los confines saharianos de Argelia, incluido Tinduf y su hierro. En esa guerra y esa reivindicación, que hace que el trazado fronterizo entre los dos países por el Sur no esté aún hoy día homologado, reside el trasfondo de pugna argelino-marroquí con que se presenta también el conflicto del Sahara.

El nacionalismo saharauí militante contra España no apareció hasta la década de los años setenta. El propio Frente Polisario, al escribir su historia, sitúa su inicio el 20 de mayo de 1973, cuando atacaron el puesto militar español de Janga para liberar a El Uali. Cuando se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, ese nacionalismo revolucionario tenía corta vida. Se trata de un hecho histórico que no puede ser simplificado y reducido a unas cuantas claves para andar por casa y militar a favor de uno u otro lado, sino que es necesario asumirlo en su totalidad fáctica, entre otras cosas porque ello no altera para nada los datos esenciales del planteamiento actual del conflicto.

Lo que más nos ha preocupado a los periodistas españoles durante esta década transcurrida fue encontrar una racionalidad de Estado a la decisión española favorable a Marruecos, y tratar de hallarle una coherencia a la política exterior del primer Gobierno de la transición, entendiendo por éste todo el periodo en que Adolfo Suárez estuvo al frente del poder ejecutivo. Lo que más nos ha ocupado, sin embargo, fue intentar desvelar las famosas cláusulas secretas contenidas en los Acuerdos, por suponer que éstas pondrían al descubierto intereses egoístas y posibles deslealtades.

Aunque poco se sabe todavía de ciertas

intervenciones de hombres políticos españoles que ya han desaparecido de escena, lo lamentable de aquellos Acuerdos, vistos retrospectivamente —al margen del servicio prestado a un *lobby* pro-marroquí, que en definitiva no tenía intereses relativamente importantes en Marruecos, es que las justificaciones ideológicas dadas por los principales responsables de la cesión del Sahara a Marruecos desde 1975, y sobre todo en la interpelación parlamentaria a que accedieron a someterse algunos en marzo de 1978, parecen perfectamente válidas y suficientes para aquellos hombres y aquella época.

Américo Castro afirma en *La Realidad Política de España* que *la historia de España no ha podido imponerse a todos los ánimos bajo la misma forma estructural, y que los españoles son el único pueblo de Occidente que considera como nulos y no conformes siglos enteros de su historia.* Ello puede explicar quizá tanto afán de búsqueda en el pasado. Lo cierto es que el 1 de marzo de 1976 Antonio Carro Martínez, actor privilegiado de aquella hora, pronunció una conferencia en la Sociedad de Estudios Internacionales en la cual afirmó que la solución adoptada había sido *milagrosamente favorable para España... Para mi el Sahara nunca fue una provincia de España... Dios quiera que no se repita allí la experiencia de Vietnam.* José Solís, personaje también clave, dijo años más tarde que *en la Marcha Verde participaron niños, ancianos, mujeres y hombres. Hassan II me dijo que estaba dispuesto a tener 30.000 bajas pero que eso no le importaba.* Interpelado por el Congreso en marzo de 1978, el general Eduardo Blanco diría quizá lo más coherente de todo lo que expusieron los protagonistas: *la solución adoptada era la única salida. El Polisario creía en una descolonización*

Lo que más nos ha preocupado a los periodistas españoles durante esta década transcurrida fue encontrar más racionalidad de Estado a la decisión española favorable a Marruecos.

al estilo de Ho Chi Minh o Mozambique, y rechazaba cualquier política pactista con España. Un Sahara independiente, impregnado de la ideología argelina, ten-

dría sin duda la presencia de Cubillo, y Marruecos estaría presionando sobre Ceuta y Melilla.

Es decir, y resumiendo, nada menos que un ministro de la Presidencia no creyó nunca que el Sahara fuese provincia española, los españoles nos ahorramos un Vietnam porque Hassan II estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias; evitábamos el peligro de que el territorio sirviese de base de subversión contra Canarias, y Marruecos no nos pondría contra las cuerdas en el tema de Ceuta y Melilla. No vale la pena recordar que ningún servicio secreto de la época consideraba en aquellos días que Marruecos fuese capaz de iniciar una guerra contra España, y menos aún que si la lanzaba pudiera ganarla.

Acertadas o no, inteligentes o mediocres, éstas eran las consideraciones estratégicas y los análisis de que eran capaces los hombres que iban a dejar de gobernar en España después de unos larguísimos 40 años de su historia. En la actualidad 63 países han reconocido a la RASD, casi el doble que hace cinco años, pero todos siguen reclamando en la ONU el referéndum de autodeterminación, como si ambas cosas fuesen compatibles. El pensamiento subyacente está, naturalmente, colocado en el principio del respeto de las fronteras heredadas de la colonización, que haría que en el caso del Sahara sólo la independencia fuese admisible, pero que Marruecos cuestiona cuando invoca la Resolución 1.541 de 1960 de la ONU que establece que la autodeterminación no tiene por qué ser solamente la independencia. Frente a esos reconocimientos masivos de la RASD, Marruecos pretende que ejerce un control militar total sobre el territorio, con lo cual sugiere que la ecuación del conflicto está planteada en el presente en términos de *control militar* contra *éxitos diplomáticos*.

Diez años de problemas para España: la pesca como protagonista

Según versiones españolas contrastadas con otras marroquíes, Marruecos, a cambio de los Acuerdos Tripartitos, concedió derechos de pesca a España en toda su ZEE adyacente al litoral atlántico y mediterráneo. Ochocientos pesqueros podrían faenar en lo próximos 20 años sin pagar derechos durante cinco años en las aguas marroquíes y 20 años en las aguas del Sahara; admitía que España conservase el 35 por ciento de las acciones de Fos Bu Craa, y la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur, BMCE, garantizaba el pago, en cuatro plazos anuales, del 65 por ciento de las acciones que adquiriría el Estado marroquí en una empresa en la que el Estado español había invertido ya más de 25.000 millones de pesetas de la época.

En noviembre de 1975 España y Marruecos podían haber tomado en consideración para el Acuerdo la cifra de 800, 8.000 u 80 barcos, porque entonces ni Madrid ni Rabat tenían la más remota idea de cuántos pesqueros españoles faenaban en el Atlántico y el Mediterráneo.

Pero lo que no podía ignorar el Gobierno español en absoluto era que la famosa Ley del almirante Boada —otro de los grandes negocios del franquismo— había lanzado a los astilleros españoles a la construcción masiva de pesqueros justamente cuando la evolución restrictiva del Derecho del Mar y la proliferación de los regímenes de Zonas Económicas Exclusivas hubieran debido sugerir todo lo contrario.

Lo cierto es que el Rey Hassan II no iba a respetar los términos de un Acuerdo que le había dado la oportunidad de dotarse de 3.000 kilómetros de costa adquiriendo así un formidable elemento de presión contra España. La oposición de la opinión pública española al Acuerdo, en un principio, le daría argumentos para no respe-

tarlo. El tampoco tenía una situación interna fácil. Aunque la gran reconciliación nacional marroquí, es decir, el retorno del Istiqlal al Gobierno después de 14 años de

En la actualidad 63 países han reconocido a la RASD, pero todos siguen reclamando en la ONU el referéndum de autodeterminación.

ausencia, la legalización de los comunistas, y el retorno a escena de los socialistas, se había cimentado sobre la unanimidad lograda para la recuperación del Sahara, el grupo de los Frontistas que encabezaba el ingeniero de origen judío, Abraham Serfaty, y se expresaba a través de la revista *Souffles*, se había pronunciado a favor del derecho a la autodeterminación de los saharauis. Introducían así una cuña en la unanimidad con que el Rey sostenía que todos los marroquíes respaldaban su política sahariana. En enero de 1977, 177 frontistas fueron juzgados en un importante proceso político en Casablanca, y 138 de ellos fueron condenados a penas que incluían varias cadenas perpetuas.

Marruecos respondió a la opinión pública española con presiones sobre Ceuta y Melilla y el Gobierno español se vio obligado repetidas veces a reiterar su españolidad, agravando a su vez las reacciones marroquíes. En ese contexto se planteó la negociación del acuerdo pesquero que debía recoger la confirmación de las contrapartidas contenidas en los Acuerdos Tripartitos. El texto del acuerdo firmado, divulgado en la Prensa española cuando aún se suponía secreto, originó un gran debate. Incluía, efectivamente, algunas disposiciones sorprendentes y extraordinariamente lejanas del espíritu de los Acuerdos Tripartitos, como la necesidad de que los pesqueros españoles establecieran contratos de fletamiento con sociedades marroquíes, limitaba las capturas, preveía la progresiva marroquización de la flota española, que debía ser de un 40 por ciento al final del tercer año, en lo que concierne a la flota dedicada a la pesca de la sardina, mientras que el 60 por ciento de la flota de pesca de cefalópodos debía estar marroquizada al final de los cinco años de vigencia del convenio. Además,

España concedía un crédito a Marruecos por un total de 3.525 millones de pesetas, de los cuales sólo 1.125 millones de pesetas eran para compra de barcos en España, y el resto para mejorar las infraestructuras pesqueras y portuarias marroquíes.

En el debate parlamentario de febrero de 1978 para la ratificación del Convenio de Pesca de 1977, la oposición sostendría, con razón, que se trataba de un importante retroceso con respecto a las condiciones obtenidas por España con la cesión del Sahara, contenidas en las Actas Anejas a los Acuerdos Tripartitos. El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, daría una respuesta antológica y asombrosa. Se trataba, según el, *simplemente de actas no protocolizadas internacionalmente que reflejan unas conversaciones que entonces se tuvieron*. Lo concreto y lo histórico es que Marruecos no cumplió nunca los convenios firmados con España que incluían contrapartidas que podían interpretarse obtenidas a cambio de alguna solución favorable a las diferentes reivindicaciones territoriales marroquíes.

Responsables y tratadistas marroquíes han interpretado esos incumplimientos con gran desenvoltura. El fallecido Príncipe Mulay Abdalá ha escrito que para la pesca y la navegación, Ceuta, Melilla y los Peñones *no plantean ningún problema jurídico particular entre España y Marruecos* por la sencilla razón de que *Marruecos no les reconoce aguas jurisdiccionales*. Abdeladim Tber, en su tesis de doctorado de 1980 sobre *Las Relaciones hispano-marroquíes en materia de pesca marítima*, afirma que *conscientes de la inaplicabilidad de los Acuerdos Tripartitos, las dos partes decidieron en febrero de 1976, y ¡solamente tres meses después de firmados!, reexaminar la cuestión*. Aquel Convenio de 1977, que tantas discusiones costó, ni siquiera llegó a entrar en vigor porque Marruecos no lo ratificó.

El año de 1978 sería muy difícil para España y sus relaciones con los países del Magreb se resentirían. El ministro Marcelino Oreja, con su propensión a no dejar pasar ocasión de hacer declaraciones públicas, pasaría todo su tiempo intentando contentar a una parte, pero disgustando a la otra, y realizando nuevas declaraciones para contentar a la parte anteriormente disgustada, pero irritando a la parte que antes había contentado. La gran sacudida para el Gobierno español vino de Argelia. El 17 de diciembre de 1977 el diario *El Muehahid*, órgano oficial del partido único gobernante FLN, publicó un editorial en el que proclamaba su apoyo a la independencia de las Islas Canarias, reclamada diariamente desde diciembre de 1975 por Antonio Cubillo a través de la hora de radio *La Voz de Canarias Libre*, que le concedía la emisora oficial argelina. Con

el apoyo del Gobierno argelino, Cubillo pudo ser recibido en la OUA y en enero de 1978 el Comité de Descolonización proponía que el tema de las Islas Canarias

fuese a debate en la cumbre de julio que tendría lugar en Jartum. El Gobierno español llamó a su embajador en Argel, Gabriel Mañueco, y se lanzó a una auténtica campaña africana para contrarrestar la acción argelina. Don Juan de Borbón viajó a Trípoli en misión de buenos oficios; Felipe González, líder de la oposición, visitó a varios jefes de Estado africanos con un grupo de diputados, y el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, efectuó una gira por media docena de países. El 11 de enero de 1978 Marcelino Oreja volvió a repetir ante el Congreso que *la obligación jurídica de España está en el cumplimiento de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, haciendo posible que los saharauis lleguen a expresar su punto de vista sobre el futuro del territorio. La descolonización no se ha consumado.*

El 20 de abril de 1978, 15 días después de que Antonio Cubillo fuese herido en un atentado que Argelia atribuyó a los

servicios especiales españoles, fueron capturados por el Frente Polisario ocho pescadores del pesquero canario «Las Palomas» y conducidos a Tinduf. Mohamed Abdelaziz, Secretario General del Polisario, afirmó que serían juzgados por pillaje de las riquezas de la RASD. El calvario del Gobierno —los pescadores regresaron aparentemente muy satisfechos de su estancia entre el Polisario— duró hasta el 14 de octubre, en que después de una difícil negociación conducida por Javier Rupérez, responsable de relaciones exteriores de UCD, fueron puestos en libertad. Esa negociación, incluida la asistencia de Rupérez al IV Congreso del Polisario y el comunicado conjunto que firmó con él, reconociéndole como representante único y legítimo del pueblo saharauí en lucha, originó una violenta reacción en Marruecos, que respondió resucitando su recla-

El comunicado conjunto que firmó UCD con el Polisario, reconociéndole como representante único y legítimo del pueblo saharauí en lucha, originó una violenta reacción de Marruecos.

mación de Ceuta y Melilla, y no firmando con España el esperado acuerdo de pesca a largo plazo que permitiese la estabilidad jurídica en el faenar de los pesqueros es-

pañoles.

En los tres o cuatro años siguientes las relaciones de España con sus dos principales vecinos del Magreb serían de permanentes acciones y reacciones que, en el caso de Marruecos, se traducían en constantes apresamientos de pesqueros, planteamientos esporádicos pero violentos de su reclamación de Ceuta y Melilla, y en su negativa a firmar acuerdos de pesca a largo plazo para mantener a todo el sector pesquero en la angustia de los acuerdos transitorios de tres meses, dos meses, un mes, y a veces hasta de quince días.

A un grupo de diputados españoles que visitaron Rabat en mayo de 1978, el Presidente del Parlamento marroquí, Dey Uld Sidi Baba, dijo que *deseamos negociar (sobre Ceuta y Melilla) sin prisas, pero en todo caso antes de la próxima Asamblea General de la ONU.* A fines de junio fue el propio Presidente del Gobierno,

Adolfo Suárez, quien viajó a Rabat, precedido por algunos globos de sondeo marroquíes, como el artículo aparecido en el diario socialista *Al Moharrer* del 16 de

El derrocamiento del Presidente mauritano, en 1978, cambió radicalmente los datos del conflicto del Sahara.

junio —que recogería Pablo Sebastián en *El País* el 21 de junio—, en el cual se afirmaba que existía un pacto secreto entre los dos países para llegar a una fórmula sobre Ceuta y Melilla, que empezaría a aplicarse en 1981, y que consistía en la internacionalización transitoria de las dos ciudades durante un período pactado, después del cual quedarían bajo la soberanía marroquí.

Pero el derrocamiento del Presidente Mauritano Uld Daddah, en un golpe de Estado el 10 de julio de 1978, cambió radicalmente los datos del conflicto del Sahara. El 14 de agosto de 1979 Mauritania se retiró unilateralmente del territorio de Río de Oro que le había correspondido en los Acuerdos Tripartitos de Madrid y Marruecos, ejerciendo un supuesto derecho de retracto, anexó también esa zona. La ocasión para poner en tela de juicio los Acuerdos Tripartitos de Madrid parecía única. Visto en retrospectiva, asombra el poco interés que pusieron todos los opositores de aquella decisión española de 1975 en intentar al menos forzar un replanteamiento jurídico del problema.

La cumbre de la OUA de Jartum no respaldó los intentos argelinos sobre las Canarias, y el Gobierno español pudo respirar unos días tranquilo. En enero de 1979 el Rey Hassan II, que deseaba crear un ambiente favorable a la visita que había planeado efectuar a España, invitó a un grupo de hombres de negocios y periodistas españoles a visitar Marruecos. A los periodistas les dijo que no plantearía el problema de Ceuta y Melilla hasta que España no recuperase Gibraltar. A los hombres de negocios les hizo ver las supuestas numerosas ocasiones de hacer negocios con Marruecos perdidas por las empresas españolas. Relacionar todas las

ocasiones oportunas e inoportunas en que el ministro Marcelino Oreja repitió precisiones sobre los Acuerdos o sobre la posición de España sería tarea ardua y probablemente poco interesante. Lo importante es saber que Marruecos o Argelia nunca dejaron de responder a ninguna de ellas y, en el caso de Marruecos, movimientos de liberación de Ceuta y Melilla fantasmas recurrieron con frecuencia al terrorismo en las dos ciudades.

El viaje del Rey Juan Carlos a Marruecos en junio de 1979 puso al descubierto una cierta disonancia entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno, y quizá preludió el cambio de la política —y más que política conviene decir de actitud— española hacia el norte de Africa, contenido en el discurso de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en 1981, y que se mantiene hasta el presente. Los marroquíes siempre estimaron que Adolfo Suárez decidió viajar a Argelia poco antes de la fecha en que el Rey tenía previsto viajar a Fez, para reducir el alcance del viaje marroquí de don Juan Carlos. Por eso Marruecos pospuso la primera fecha fijada. Cuando el Rey de España llegó a Fez, Hassan II le recibió al son del himno de la Marcha Verde, camuflado entre los himnos nacionales de los dos países. Como prueba de que todos los recelos mutuos no habían sido resueltos, el Rey Juan Carlos llevaba en su bolsillo dos versiones diferentes del discurso que debía pronunciar en la cena que le ofrecía su colega marroquí, uno de ellos en previsión de que mencionase el tema de Ceuta y Melilla.

Lo que todavía tardaría un par de años en ser actitud de España hacia el Mogreb estaba, sin embargo, esbozado en el comunicado oficial que se dio a la publicidad después del viaje real. Don Juan Carlos había dicho en su alocución, aludiendo a su reciente gira africana, que *el Gobierno español ha reiterado recientemente su vocación africana, respondiendo a un*

nuevo mandato geográfico, que ahora sólo puede tener la forma de un propósito de amistad y cooperación entre países iguales, y que deberá comenzar, por razones obvias, por Marruecos. Este proyecto de actitud hacia el norte de Africa no comenzaría a concretarse hasta la llegada de Leopoldo Calvo Sotelo al Gobierno el 20 de febrero de 1981. El Gobierno de Calvo Sotelo duró menos de la mitad de una legislatura, y en octubre de 1982 el partido socialista ganó las elecciones.

Desde entonces hasta el presente aquella nueva actitud se ha traducido en hechos concretos que han llevado a una de-
crispación de las relaciones con Argelia, Marruecos y el Frente Polisario, lo cual no ha impedido que en lo que va de legis-
latura socialista se hayan producido fric-
ciones importantes. A un alto coste eco-
nómico, se han resuelto los dos principa-

les contenciosos pen-
dientes: el acuerdo
gasístico con Arge-
lia, y la estabilidad ju-
rídica de los arma-
dores que envían sus
barcos a faenar en
aguas marroquíes o

bajo control de Marruecos. El Acuerdo
Pesquero de agosto de 1983, que en jus-
ticia puede decirse que es el verdadero
convenio de pesca de los Acuerdos Tri-
partitos de Madrid de 1975, proporciona
a la pesca un marco jurídico hasta su ex-
piración en agosto de 1987.

El ingreso de España en la Comunidad
Económica Europea permite, sin embargo,
a Marruecos, en virtud del artículo 16 del
título VI, solicitar nuevas negociaciones
para revisar el acuerdo para introducir las
modificaciones que ambas partes juzguen
oportuno. Si bien el acuerdo fue alcan-
zado al comienzo de la legislatura socia-
lista, justo es reconocer que sus aspectos
esenciales habían sido ya esbozados en las
discusiones entre el Gobierno marroquí y
el anterior Gobierno de UCD.

El contencioso gasístico con Argelia tam-
bién ha sido resuelto, de manera onerosa

para el contribuyente, pero en el presente
resulta difícil establecer qué aspectos de la
política exterior no cuestan caros a la na-
ción en su conjunto. El viaje de Felipe
González a Argel, como complemento de
los anteriores del vicepresidente Alfonso
Guerra, y la visita a Madrid en julio de
1985 del presidente Chadly Benyedid, pa-
recen haber permitido llegar a un *modus
vivendi*, en virtud del cual las dos partes
aceptan mantener un perfil bajo en sus
relaciones que tal vez algún día pueda
transformarse en una política normal.
Las relaciones con el Frente Polisario
siempre fueron pasionales, y como tales
conocen altos y bajos. Durante mucho
tiempo, por lo menos durante toda la eta-
pa de UCD, para aquellos hombres polí-
ticos salidos del franquismo sin pedigree
democrático, respaldar verbalmente al Fren-
te Polisario y a todos aquellos movimien-
tos o países que los hábitos y costum-

bres han incluido en
una cierta cultura de
izquierdas parecía im-
prescindible para una
habilitación a vivir en
esta nueva sociedad
democrática. Después
se ha descubierto
que existen intereses nacionales, dignidad
nacional, que cada cual debe contribuir,
preferentemente, a la transformación de
su propia sociedad, y sobre todo que los
prejuicios políticos deben ser siempre ob-
jeto de una segunda valoración. En esa
tesitura, las condiciones están creadas para
unas buenas relaciones, diferentes desde
luego con el Frente Polisario.

La inclinación del Gobierno español,
expresada por Felipe González, a conside-
rar en esta materia como válidas aquellas
decisiones o soluciones que propongan
tanto la ONU como la OUA, parece una
plataforma razonable que las otras partes
no deberían rechazar. En cuanto a Ma-
rruecos, no cabe duda que el triunfo so-
cialista en las elecciones de 1982 colocó a
los altos Estados Mayores marroquíes en
auténtico zafarrancho de combate. Temían
que el Gobierno pudiese intentar la dero-
gación de los Acuerdos Tripartitos, como

**El viaje del Rey a Marruecos,
en 1979, puso al descubierto
una cierta disonancia entre
la Jefatura del Estado y la
Presidencia del Gobierno.**

había sugerido en alguna ocasión el PSOE. La respuesta marroquí era la presión a ultranza sobre Ceuta y Melilla. El viaje del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, a Marruecos inmediatamente después de las elecciones, la concesión por Marruecos de una nueva moratoria de seis meses para llegar a un acuerdo pesquero, tranquilizaron algo al Rey Hassan II.

La resolución votada en febrero de 1983 por la Unión de Parlamentarios Arabes, reunida en la capital marroquí, en la cual a instancias de los diputados marroquíes se invitaba a España a entablar urgentes negociaciones con Marruecos «con vistas a la descolonización de Ceuta y Melilla», debía servir para recordar a España que en Rabat seguían preparados para cualquier eventualidad. El 28 de marzo, Felipe González, de visita en Rabat, afirmaba que el Gobierno español tiene el *firme propósito de mantener relaciones amistosas y constructivas* con todos los países, y en particular *con aquellos a los que por razones de vecindad geográfica, de convivencia histórica o de cultura compartida, nos sentimos más próximos*.

Después se intentó, con relativo éxito, mejorar el papel de la colaboración de las empresas españolas con Marruecos, se ha establecido una importante cooperación militar que era imprescindible entre dos países cuyas principales zonas de seguridad se solapan en el Mediterráneo, el Estrecho y el Atlántico, y se pretende reducir al máximo las repercusiones del problema endémico originado por la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla. Ahora el Rey de Marruecos debe devolver la cortesía al Rey Juan Carlos. El Monarca marroquí es el único jefe de Estado de país vecino o amigo que nunca ha efectuado una visita oficial a España. Esa primera visita debió tener lugar a fines de 1985 o principios de 1986. Pero la condición que puso el Rey Hassan II a

Francisco Fernández Ordóñez, durante su visita a Rabat en agosto pasado —que España no votase en la ONU a favor del proyecto de resolución inspirado por Argelia y que solicita negociaciones directas entre Marruecos y el Polisario—, confirma lo difíciles que continúan siendo las relaciones con el país vecino.

Todo lo expuesto, sin embargo, son actitudes o inclinaciones en la política exterior hacia el norte de Africa, pero no son en sí mismas política exterior. El ingreso en la Comunidad Económica Europea, la controversia en torno a la permanencia o no de España en la OTAN, y las próximas elecciones, han alejado de nuevo la preocupación por el norte de Africa del ánimo de los gobernantes y de la propia opinión pública.

Sin embargo, resulta inconcebible que no exista una política clara y definida, que englobe una posición hacia el conjunto de los problemas actuales y perspectivas con los países de la región, sobre todo de parte de una nación como España que es tratada siempre por sus socios norteafricanos como si ella tuviera siempre las malas cartas, y los demás todos los elementos de presión, y sobre cuya opinión pública tanto Marruecos, como Argelia, el Frente Polisario, y los demás países árabes están en condiciones de influir sin contrapartida de ningún tipo.

El proyecto de establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel proporciona el ejemplo más claro a este respecto. Antes de que se establezcan, algunos países árabes han expresado su descontento, y otros han llegado incluso a amenazar con tomar represalias.

Sin embargo, Egipto, el país árabe más

El ingreso en la CEE, la controversia en torno a la OTAN, y las próximas elecciones, han alejado de nuevo la preocupación por el norte de Africa.

importante e influyente, tiene desde hace tres años un embajador en Tel Aviv, e Israel lo tiene en El Cairo. Si el Rey Hussein de Jordania no ha establecido aún esas

relaciones diplomáticas es por temor a que le ocurra como a su abuelo, pero es evidente que mantiene varios canales de comunicación con el Gobierno israelí; el Rey Hassan II de Marruecos ha servido incontables veces de mediador entre los árabes e Israel, y fue el anfitrión de un Congreso judío mundial, al que asistieron dos ministros del Gobierno israelí y varios diputados de la Knesseth. El propio Yasser Arafat, Presidente de la OLP, hubiera reconocido este mismo año pasado al Estado de Israel por poco que Tel Aviv hubiese moderado su intransigencia. Ahora resulta que hasta el propio Gaddafi lleva en sus venas sangre judía.

España ha comenzado a actuar con seriedad, coherencia y firmeza en la defensa de sus intereses. Ya se han acabado —o por lo menos han quedado atenuadas— las controversias públicas con esos países. Ahora es necesario evaluar el posible arsenal de medios de que dispone España para contrarrestar eventuales presiones y amenazas. La única manera moderna de lograrlo es establecer relaciones cordiales y estrechas con todos los vecinos y eso presupone la elaboración de una política a largo plazo, que pueda sobrevivir además a gobiernos de diferente tinte ideológico.